

CUESTIONARIO TIPO TEST DEL PRIMER EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DIECISÉIS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO CON RESERVA DE DOS PLAZAS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, POR EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE

Melilla a 6 de septiembre de 2026

1. De conformidad con lo dispuesto en el 16.3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, NO tienen la consideración de contratos de suministro:

- a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.
- b) **La adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.**
- c) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.

2. Tal y como describe el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿señale que tipo de subvenciones podrá concederse de forma directa?

- a) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con la normativa estatal.
- b) **Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.**
- c) Las dos son correctas.

3. Es objeto de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público de conformidad con el artículo 1.2:

- a) **La regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.**
- b) La regulación del régimen jurídico no aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.
- c) La regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, incumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

4. El art. 36 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público establece que los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan con:

- a) **Su adjudicación**
- b) Su formalización.
- c) De conformidad con la legislación aplicable.

5. De conformidad con el art. 37 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿pueden las entidades del sector público contratar verbalmente?

- a) **Si, cuando tengan carácter de emergencia.**
- b) Si, cuando tengan carácter de urgencia.
- c) Si, las Administraciones Públicas siempre pueden contratar de forma verbal, según las condiciones aplicables al caso.

6. ¿Cuál de las siguientes menciones, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, NO debe incluirse en los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público según el art. 35 de la Ley de Contratos?

- a) Las condiciones de pago.
- b) Los supuestos en que procede la modificación, en su caso.
- c) **La denominación de las empresas subcontratistas que pretenda contratar la empresa contratista adjudicataria del contrato.**

7. Según el artículo 48.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo:

- a) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
- b) **La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.**
- c) La realización de actuaciones administrativas dentro del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

8. Respeto al principio de responsabilidad consagrado en el artículo 32, de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale cual no se ajusta al mencionado artículo;

- a) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
- b) **Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.**
- c) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

9. En virtud del artículo 68 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, figura la Rehabilitación de la condición de funcionario. Una de las respuestas es INCORRECTA:

a) En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que podrá ser concedida.

b) Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud

c) En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida.

10. El art. 23.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo establece que:

a) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabrá recurso de revisión.

b) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabrá recurso de alzada.

c) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

11. Según el art. 61.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo:

a) Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.

b) Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.

c) Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para tramitar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del

procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.

12. El art. 77.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo establece que:

- a) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter vinculante.
- b) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.**
- c) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho privado, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.

13. A tenor de lo que establece el artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en referencia al expediente de contratación en contratos menores, diga cual es la INCORRECTA:

- a) En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del interventor justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos.**
- b) Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
- c) En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

14. El artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regula determinadas prestaciones que no tienen tal carácter, indique la INCORRECTA:

- a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social
- b) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial.
- c) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora.**

15. En cuanto a los créditos a reintegrar y de los procedimientos para su exigencia, el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

establece la naturaleza de los mismos. Señale cual NO se corresponde con lo establecido por la ley:

a) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

b) El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 20 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.

c) Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo.

16. De conformidad con el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, son causas de reintegro las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes casos. Indique la INCORRECTA:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Solamente el incumplimiento total del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.

17. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la avocación se realizará:

a) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.

b) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con posterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.

c) Mediante acuerdo motivado que no deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.

18. En relación al artículo 83 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los montes vecinales en mano común, serán regulados por:

a) **Su legislación específica.**

b) Exclusivamente por la legislación autonómica.

c) Exclusivamente por legislación estatal.

19. Según el artículo 79.3 de la 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿qué bienes tienen la consideración de comunales?

- a) Aquellos bienes patrimoniales cuyo uso se cede a los vecinos mediante el pago de un precio público.
- b) Aquellos bienes que siendo de dominio público, su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.**
- c) Aquellos bienes que, careciendo de dueño conocido, son utilizados habitualmente por los vecinos de un municipio.

20. Las Entidades locales gozan de la prerrogativa de recuperar por sí mismas la tenencia de sus bienes. Según el artículo 82 la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿en qué plazo podrán hacerlo?

- a) En el plazo de un año, independientemente de si los bienes son de dominio público o patrimoniales.
- b) En cualquier tiempo para todo tipo de bienes, sin sujeción a plazo ni condición alguna.
- c) En cualquier tiempo cuando se trate de los de dominio público y, en el plazo de un año, los patrimoniales.**

21. Siguiendo la literalidad del artículo 79.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿por qué está constituido el patrimonio de las Entidades Locales?

- a) Por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que les pertenezcan.
- b) Por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan.**
- c) Por el conjunto de bienes muebles, inmuebles y derechos reales que les pertenezcan.

22. Según el artículo 80.1 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los bienes comunales y los demás de dominio público son:

- a) Inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.**
- b) Alienables, inembargables e imprescriptibles, pero sujetos a los tributos estatales
- c) Inalienables e inembargables, pero prescriptibles a los treinta años y no están sujetos a tributo alguno.

23. Según el artículo 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), ¿qué constituyen los presupuestos generales de las entidades locales?

- a) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como mínimo, pueden reconocer la entidad y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar.
- b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.**
- c) La expresión contable, exclusiva e independiente de los gastos e ingresos de la entidad local, excluyendo a sus organismos autónomos.

24. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 169.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), en relación a la aprobación de los presupuestos de las entidades locales, ¿cuándo habrá de realizarse la aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación?

- a) Antes del día 15 de octubre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
- b) Antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.**
- c) Durante el primer trimestre del año natural en que deba iniciar su vigencia.

25. De conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), una vez aprobado inicialmente el presupuesto y expuesto al público, ¿qué sucede si durante el plazo de quince días hábiles de exposición no se hubiesen presentado reclamaciones?

- a) Deberá ser sometido nuevamente a votación del Pleno para su ratificación definitiva.
- b) El presupuesto se considerará definitivamente aprobado.**
- c) Deberá remitirse a la Comunidad Autónoma correspondiente para que autorice su aprobación definitiva.

26. En relación con la prórroga del presupuesto prevista en el artículo 169.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), ¿qué ocurre si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente?

- a) Se prorrogará el presupuesto del ejercicio anterior, incrementando los créditos en el porcentaje de inflación interanual.
- b) Quedará suspendida la ejecución de nuevos gastos hasta la aprobación del nuevo presupuesto.
- c) Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales.**

27. De acuerdo con el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), dentro del procedimiento de elaboración de los presupuestos, ¿En qué plazo formará y remitirá el presidente el presupuesto general al Pleno de la Corporación para su aprobación, enmienda o devolución?

- a) Antes del día 15 de octubre.**
- b) Antes del día 1 de noviembre.
- c) Antes del 31 de diciembre.

28. De conformidad con lo previsto en el artículo 98.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo relativo a las medidas provisionales

que se podrán adoptar en el procedimiento disciplinario, señale la afirmación CORRECTA:

- a) El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas, complemento de destino y la parte proporcional de las productividades que hubiera devengado hasta el inicio del procedimiento sancionador.
- b) El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.**
- c) El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión, las retribuciones básicas y en su caso las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio.

29. En los términos previstos en el artículo 7 de Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas; será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

- a) Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.**
- b) Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
- c) No se establece límite porcentual alguno en tanto en cuanto la cantidad total percibida para ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista para el cargo de Director General.

30. De acuerdo con el artículo 95.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto a la clasificación de las faltas disciplinarias, es una falta MUY GRAVE:

- a) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas.**
- b) El cumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
- c) La no publicación o utilización debida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

31. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su Artículo 78, rezan los Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera. Diga cual es la CORRECTA;

- a) Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

b) Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de objetividad, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

c) Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

32. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales:

a) Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación y podrán serlo cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación.

b) Quedarán sin efecto las licencias y restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren otorgadas erróneamente.

c) Las licencias quedarán anuladas si se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación y podrán serlo cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación.

33. A tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, en cuanto a la posibilidad de transmisión de las licencias, señale la afirmación INCORRECTA:

a) Las licencias concernientes a las cualidades de un sujeto o al ejercicio de actividades sobre bienes de dominio público serán o no transmisibles, según se prevea reglamentariamente o, en su defecto, al otorgarlas.

b) Las licencias relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicio no serán transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o empresario deberán comunicarlo por escrito a la Corporación, sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se derivaren para el titular.

c) Las licencias relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicio serán transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o empresario deberán comunicarlo por escrito a la Corporación, sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se derivaren para el titular.

34. Conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, respecto a la sesión por la que el Presidente puede plantear ante la Asamblea la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general:

a) La sesión será presidida por el Secretario General de la Asamblea de Melilla y la confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los miembros de aquélla.

b) La sesión será presidida por el Vicepresidente de la Asamblea de Melilla y la confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de los miembros de aquélla.

c) La sesión será presidida por el Vicepresidente de la Asamblea de Melilla y la confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los miembros de aquélla.

35. Según lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, respecto de las atribuciones como Presidente del Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las sustituciones en caso de ausencia, enfermedad o impedimento temporal NO podrán ser objeto de delegación las funciones de:

a) Convocar las sesiones y reuniones del Consejo de Gobierno, fijar el orden del día, presidir, suspender y levantar sus sesiones y dirigir las deliberaciones.

b) Nombrar y separar al Vicepresidente o, en su caso, a los Vicepresidentes, a los Consejeros y Viceconsejeros, dando cuenta de ello a la Asamblea de la Ciudad de Melilla.

c) Solicitar Dictamen del Consejo de Estado.

36. De conformidad con el artículo 7.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las competencias de las Entidades Locales son:

a) Propias o atribuidas por las Comunidades Autónomas.

b) Propias o atribuidas por Ley.

c) Propias o atribuidas por delegación.

37. De acuerdo con el artículo 13.4 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿cuánto tiempo ha de transcurrir para que el nuevo Municipio resultante de una fusión pueda segregarse?

a) Una vez transcurridos cinco años desde la adopción del convenio de fusión.

b) Una vez transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión.

c) Una vez transcurridos quince años desde la adopción del convenio de fusión.

38. De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo, se considerarán:

a) Anulables.

b) Nulos y sin efecto.

c) Nulos o anulables, según el tipo de discriminación.

39. De conformidad con el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿quién está legitimado en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo?

- a) La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo.**
- b) Los Jueces y Tribunales.
- c) Los abogados defensores de la persona acosada.

40. Según el artículo 8.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos:

- a) Podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.**
- b) No podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias
- c) Podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente independientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

41. Según el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, si no se designa suplencia de los titulares de los órganos administrativos, ¿por quién se ejercerá la competencia?

- a) Por el órgano competente que realizó el nombramiento del titular.
- b) Por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa.**
- c) No existe la figura de la suplencia.

42. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación de los interesados en un procedimiento administrativo:

- a) Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, salvo que aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.
- b) Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, salvo que aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de quince días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.
- c) No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.**

43. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los empleados públicos de las Administraciones Públicas, ¿están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo?

- a) Sólo los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.**
- b) Deberán relacionarse siempre a través de medios electrónicos.
- c) Podrán elegir la forma de relacionarse con las Administraciones Públicas.

44. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51.3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 30 de enero de 2017, en lo relativo a las atribuciones en materia de asesoramiento legal le corresponde a los Secretarios Técnicos:

- a) La emisión de informes previos en materia de contratación administrativa conforme a lo establecido en el artículo 112 del presente Reglamento.**
- b) Elaborar la propuesta de licencias, vacaciones y permisos del personal adscrito a su Consejería, de acuerdo con las necesidades del servicio.
- c) Dictar Circulares e Instrucciones internas en el ámbito de la Consejería y Dirección General a la que esté adscrito.

45. El artículo 65.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público establece que solo podrán contratar con el sector público:

- a) Las personas naturales o jurídicas, españolas, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
- b) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.**
- c) Las personas naturales, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

46. Con referencia a la garantía provisional y de conformidad con el artículo 106 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y no siendo necesario su justificación en el expediente.

- b) En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.
- c) En el procedimiento de contratación se exigirá siempre la garantía provisional.

47. ¿Cuándo se aprobarán los pliegos de cláusulas administrativas particulares de conformidad con el artículo 122.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público?

- a) Una vez se disponga del crédito necesario para llevar a cabo el objeto del contrato.
- b) Junto con la resolución motivada del órgano de contratación aprobando el mismo.
- c) **Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.**

48. El art. 131 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público establece que, la adjudicación de los contratos se realizará ordinariamente utilizando:

- a) Un sólo criterio de adjudicación basado en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales.
- b) **Una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales.**
- c) Una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio y utilizando sólo el procedimiento abierto salvo los contratos de concesión de servicios especiales.

49. En base al artículo 14 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, marque la INCORRECTA:

- a) A la libre asociación profesional.
- b) **A la libertad sindical**
- c) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

50. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el precio, de conformidad con el art. 158 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿cuál es el plazo máximo para que recaiga resolución?

- a) Un mes a contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones.
- b) Diez días a contar desde el siguiente al de apertura de proposiciones.
- c) **Quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.**

51. El artículo 193 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, determina que cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de:

- a) 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.**
- b) 0,50 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.**
- c) 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA incluido.**

52. ¿Será la Administración responsable de los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, de conformidad con el art. 196 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público?

- a) No, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor de proyecto.**
- b) Si, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315, o en el contrato de suministro de fabricación**
- c) No, la responsabilidad recaerá sobre el contratista.**

53. El art. 191.3 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece que será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación:

- a) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.**
- b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido, y su precio sea igual o superior a 5.000.000 de euros.**
- c) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.**

54. Según el art. 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo:

- a) El personal al servicio de las Administraciones Públicas que no tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.**

- b) El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución tácita en plazo.
- c) El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo.**

55. El art. 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo, en relación a los supuestos en los que el plazo máximo legal para resolver se podrá suspender, establece que:

- a) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un posterior pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.
- b) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.**
- c) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que no deberá serles comunicado.

56. Según el art. 23.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo, ¿cuándo se podrá ampliar el plazo máximo para resolver y notificar?:

- a) Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, no podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento.
- b) Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento.**
- c) Excepcionalmente, cuando no se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento

57. Según el art. 100.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo:

- a) Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que no requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
- b) Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas no deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
- c) Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.**

58. El art. 120.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo establece que:

- a) Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda.**
- b) Recaído el pronunciamiento judicial, no será comunicado a los interesados y el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda.
- c) Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el órgano administrativo competente para resolver no podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda.

59. Según el art. 126.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo:

- a) El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse sólo sobre la procedencia del recurso.
- b) El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión no debe pronunciarse sobre la procedencia del recurso ni, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.
- c) El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.**

60. Según el art. 28.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores no podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.

b) Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.

c) Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.

61. El art. 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público establece que:

a) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

b) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

c) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción sin que haya transcurrido el plazo para recurrirla.

62. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales, y además varios que se establecen a continuación. Señale la INCORRECTA:

a) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

b) Eficiencia en la planificación y gestión de los recursos humanos.

c) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

63. Según el art. 29.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación al principio de proporcionalidad:

a) Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior.

b) Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver no podrá imponer la sanción en el grado inferior.

c) Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado superior.

64. De acuerdo con el artículo 63 de la Constitución Española de 1978, ¿a quién corresponde declarar la guerra y hacer la paz?

a) Al Gobierno, previa autorización del Rey.

b) Al Rey, previa autorización de las Cortes Generales.

c) Al Rey, previa autorización del Congreso de los Diputados.

65. El artículo 167 de la Constitución Española de 1978 establece que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados:

a) Por mayoría de tres quintos del Congreso.

b) Por mayoría de dos tercios de cada una de las cámaras.

c) Por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.

66. Conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Española de 1978, ¿quién será competente en las causas contra Diputados y Senadores?

a) El Tribunal Constitucional.

b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

67. La cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno en el artículo 112 de la Constitución Española de 1978, se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma:

a) La mayoría simple del Congreso de los Diputados.

b) La mayoría simple del Congreso de los Diputados y del Senado.

c) La mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

68. En base a lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Española de 1978, ¿quién nombra al Fiscal General del Estado?

a) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Congreso, entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

b) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

c) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

69. ¿Cuál de los siguientes derechos podrá ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio según lo establecido en el artículo 55 de la Constitución Española?

a) El derecho de asociación.

b) El derecho de huelga.

c) El derecho a participar en asuntos públicos.

70. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, ¿qué Comisión se designará en las Cortes Generales para relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos Plenos en cuantas ocasiones sea necesario?

a) Una Comisión Mixta Congreso-Senado.

b) Una Comisión Permanente formada por los grupos parlamentarios más representativos.

c) Una Comisión Permanente Congreso-Senado.

71. En base a lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, ¿En cuál de los siguientes casos NO será declarada la vacante en el cargo por el Presidente del Gobierno? PREGUNTA ANULADA

a) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.

b) Por muerte o por incapacidad sobrevenida.

c) Por expiración del plazo de su nombramiento.

72. Según lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Española, Corresponde al Rey:

a) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la ley.

b) Convocar a referéndum en los casos previstos en la ley.

c) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

73. La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, establece en su artículo 10 que las sesiones extraordinarias solicitadas por al menos la cuarta parte de los miembros de la asamblea deberán celebrarse:

- a) En el plazo máximo de un mes a partir la solicitud.
- b) En el plazo máximo de tres meses a partir de la solicitud.
- c) En el plazo máximo de dos meses a partir de la solicitud.**

74. Según el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, el Consejo de Gobierno cesará:

- a) Incapacidad de su Presidente.**
- b) Aprobación por parte de la Asamblea de una cuestión de confianza.
- c) Dimisión de un tercio de los Consejeros.

75. Conforme a lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Española de 1978, cualquier ciudadano podrá recabar ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, la tutela de las libertades y derechos recogidos en:

- a) La sección segunda del capítulo I.
- b) La sección primera del capítulo II.**
- c) La sección segunda del capítulo II.

76. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA en relación con la moción de censura del Presidente, observando lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla:

- a) El Presidente no podrá plantear la moción de censura mientras esté en trámite una cuestión de confianza.
- b) Si la Asamblea negara su confianza, el Presidente presentará la dimisión y el Vicepresidente de la Asamblea convocará, en el plazo máximo de veinte días, la sesión plenaria para la elección del nuevo Presidente.
- c) La moción de censura deberá ser suscrita, discutida y votada de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.**

77. De conformidad con establecido en el artículo 32.1 Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla de 30 de enero de 2017, respecto a las declaraciones de bienes y actividades de los Consejeros:

- a) Los miembros no electos del Consejo de Gobierno, los Consejeros que tuvieran la condición de Diputados de la Asamblea, al igual que los demás miembros de la Asamblea, formularán antes de la toma de posesión de sus cargos, declaración ante el Secretario General sobre causas de posible incompatibilidad, sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como declaración de sus bienes patrimoniales.**

b) Los miembros no electos del Consejo de Gobierno, los Consejeros que tuvieran la condición de Diputados de la Asamblea, al igual que los demás miembros de la Asamblea, formularán tras la toma de posesión de sus cargos, declaración ante el Secretario General sobre causas de posible incompatibilidad, sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como declaración de sus bienes patrimoniales.

c) Los miembros no electos del Consejo de Gobierno, los Consejeros que tuvieran la condición de Diputados de la Asamblea, al igual que los demás miembros de la Asamblea, formularán antes de la toma de posesión de sus cargos, declaración ante el Presidente sobre causas de posible incompatibilidad, sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como declaración de sus bienes patrimoniales.

78. De conformidad con establecido en el artículo 17.3 Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla de 30 de enero de 2017, en lo relativo al funcionamiento del Consejo de Gobierno:

a) Para la válida constitución del Consejo de Gobierno a efectos de celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de Acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente, o en su caso, de quien le sustituya y la de un tercio, al menos, de sus miembros, o de quienes legalmente les sustituyan.

b) Para la válida constitución del Consejo de Gobierno a efectos de celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de Acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente, del Secretario del Consejo de Gobierno o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de un tercio, al menos, de sus miembros, o de quienes legalmente les sustituyan.

c) Para la válida constitución del Consejo de Gobierno a efectos de celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de Acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente, del Secretario del Consejo de Gobierno o, en su caso, de quienes les sustituyan y la de mitad, al menos, de sus miembros, o de quienes legalmente les sustituyan.

79. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, respecto a las competencias de la ciudad de Melilla, corresponde a la ciudad de Melilla la ejecución de la legislación del Estado: Señale la INCORRECTA:

a) Gestión en materia de protección del medio ambiente, incluidos los vertidos industriales y contaminantes.

b) Sanidad e higiene.

c) Protección civil.

80. De conformidad con el artículo 26 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, son órganos de la Asamblea:

- a) El Pleno, integrado por veinte Diputados, la Mesa, La Junta de Portavoces y las Comisiones.
- b) El Pleno integrado por veinticinco Diputados, la Mesa y Las Comisiones Permanentes Legislativas.
- c) **El Pleno, integrado por veinticinco Diputados, la Mesa, La Junta de Portavoces y las Comisiones.**

PREGUNTAS DE RESERVA

81. El artículo 68 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público establece que: *“Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga”*. Dicho informe será elaborado por:

- a) **Por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior.**
- b) Por la Cámara de Comercio del Municipio donde tenga su sede social la empresa extranjera.
- c) Por el Ministerio competente del país de origen de la empresa.

82. Según lo previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, en relación a la Asamblea:

a) Serán electores y elegibles los ciudadanos mayores de edad que estén en pleno uso de sus derechos políticos y cumplan con los requisitos establecidos en la legislación estatal reguladora del régimen electoral general para la celebración de elecciones locales, si bien tanto en la documentación que se tramite como en las papeletas de voto constará expresamente la mención «Elecciones a la Asamblea de Melilla» y la Asamblea electa será convocada por el Presidente cesante de la Ciudad dentro de los veinte días siguientes al de la celebración de las elecciones.

b) Serán electores y elegibles los ciudadanos mayores de edad que estén en pleno uso de sus derechos políticos y cumplan con los requisitos establecidos en la legislación estatal reguladora del régimen electoral general para la celebración de elecciones locales, si bien tanto en la documentación que se tramite como en las papeletas de voto constará expresamente la mención «Elecciones Locales a la Asamblea de Melilla» y la Asamblea electa será convocada por el Presidente cesante de la Ciudad dentro de los treinta días siguientes al de la celebración de las elecciones.

c) Serán electores y elegibles los ciudadanos mayores de edad que estén en pleno uso de sus derechos políticos y cumplan con los requisitos establecidos en la legislación estatal reguladora del régimen electoral general para la celebración de elecciones locales, si bien tanto en la documentación que se tramite como en las papeletas de voto constará expresamente la mención «Elecciones Locales a la Asamblea de Melilla» y la Asamblea

electa será convocada por el Presidente cesante de la Ciudad dentro de los veinte días siguientes al de la celebración de las elecciones.

83. Según el art. 27.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público establece que:

- a) Las disposiciones reglamentarias de desarrollo no podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.
- b) Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.**
- c) Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, constituyendo nuevas infracciones o sanciones y alterando la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.

84. Según lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, corresponde a la Asamblea de Melilla:

- a) Resolver los procedimientos de revisión de oficio de los actos administrativos nulos dictados por el Presidente, Consejeros, órganos dependientes de éstos o del propio Consejo de Gobierno.
- b) Aprobar los presupuestos y cuentas de la ciudad de Melilla sin perjuicio del control que corresponde al Tribunal de Cuentas.**
- c) Aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo con el Presupuesto y la Plantilla, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.

85. De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 30 de enero de 2017, en relación a la estructura básica de los órganos de Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla:

- a) Por Acuerdo del Consejo de Gobierno se podrá variar el número y denominación de las distintas Consejerías, dando cuenta a la Asamblea.
- b) Por Decreto del Presidente se podrá variar el número y denominación de las distintas Consejerías, dando cuenta a la Asamblea.**
- c) Por Decreto del Presidente se podrá variar el número y denominación de las distintas Consejerías, dando cuenta al Consejo de Gobierno, oída la Asamblea.